

Colombia: sólo la verdad puede conducir a la paz

Rafael Vergara

El 11 de enero de 1989, los colombianos se despertaron con la noticia de la reiniciación de las conversaciones entre el Movimiento 19 de Abril (M-19), y el gobierno encabezado por el presidente Virgilio Barco y el general Guerrero Paz. Estas se habían interrumpido sangrientamente con los episodios del Palacio de Justicia en noviembre de 1985, momento político que marca el inicio de la desbandada contrainsurgente; los asesinatos cotidianos; desaparecidos; multiplicación de los paramilitares —140 organizaciones reconocidas oficialmente—; masacres e intensificación de enfrentamientos entre la insurgencia y las fuerzas armadas en sus distintas vertientes.

En un país sumergido en una guerra no declarada pero reconocida por la sociedad colombiana y cada vez más por la comunidad internacional, el hecho no deja de representar una luz de esperanza en medio de un mar de desconfianzas y escepticismos.

Mientras un sector amplio de la sociedad, sometido a los rigores de la llamada “guerra sucia”, duda de las verdaderas intenciones y posibilidades del presidente Barco para desactivar los mecanismos de la solución militar en su propio bando, la derecha —la oligarquía militarista—, a regañadientes, manifiesta su aceptación a las negociaciones sólo si éstas permiten vencer políticamente a la insurgencia, logrando su desmovilización y reincorporación a la vida civil a cambio de nada y aprovechando la “generosidad” del Estado, exactamente lo expresado por el presidente al lanzar su plan de paz el primero de septiembre de 1988.

Para Barco; pese a que los hechos represivos parecen rebasarlo, “las opciones no pueden limitarse a una estrategia de tierra arrasada”, pues ello significaría “la rendición política del Estado”.

Paz decretada vs. paz negociada

Es conocido que el secuestro y posterior liberación del ex candidato presidencial conservador, Álvaro Gómez, permitió al M-19 reinsertarse nacionalmente en la lucha por una solución negociada y salir de la tumba decretada por las fuerzas militares, luego de los desastrosos golpes recibidos a consecuencia de su activa participación en el proceso de paz pactado con Belisario Betancur en agosto de 1984.

Pero quizá lo más importante de todo este episodio fue la conformación de la Comisión de Convivencia, entidad pluripartidista y multisectorial que exigió al gobierno, en medio de la más cruda represión, la búsqueda de una salida consensual y política en momentos en que sólo los tambores de guerra y el discurso distractivo sonaba al oído de la sociedad.

Inicialmente, el gobierno descalificó a la comisión y su propuesta de diálogo directo con la insurgencia y la sociedad civil en ella representada, y sistemáticamente buscó su desmantelamiento político argumentando el carácter espúreo de la instancia negociadora por provenir de un acto de presión inadmisibles: el secuestro de Gómez y el cumplimiento del M-19 del pacto establecido de liberarlo a cambio de reencontrar los caminos de paz, vía la solución negociada por la sociedad en su conjunto y no sólo entre la insurgencia y el gobierno.

Este hecho revitalizó a la insurgencia, que retomó la iniciativa perdida y mostró a un gobierno aislado en la estrecha visión de la solución militar y excluyente. La paz exigía una nueva actitud: dejar la retórica y las excusas y sentarse a buscar soluciones entre todas las fuerzas interesadas. El gobierno rechazó la participación de la Iglesia, el Partido Conservador, sectores de su propio Partido Liberal, la Central Única de Trabajadores, la Unión Patriótica (UP), los gremios económicos y múltiples sectores

afectados por la guerra, y decidió lanzar su plan de paz que rápidamente cayó al vacío por irrealista, como lo calificó el senador Alvaro Leyva, precandidato conservador a la presidencia y activo participante en el proceso de paz en tiempos de Belisario Betancur y en el actual.

El plan de paz del gobierno se puede sintetizar en las propias palabras del exministro de Gobierno, César Gaviria: “la propuesta de paz no es una exigencia de rendición para una guerrilla militarmente derrotada sino una generosa oferta de reconciliación del país entero hacia los alzados en armas”.

Con un diseño razonado en tres fases, Barco ofreció de común acuerdo con las fuerzas militares distensión, transición e incorporación para una guerrilla derrotada; nada que ver con la realidad colombiana, donde el proceso de unidad insurgente —la Coordinadora Simón Bolívar— ha implicado un salto político-militar y una presencia política creciente, como lo reconocen múltiples analistas. De allí la preocupación del gobierno por rescatar la iniciativa de paz.

La Coordinadora respondió con una contrapropuesta elaborada en el marco de la tercera reunión de comandantes de las distintas fuerzas insurgentes, congregadas en el campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) entre el 13 y el 16 de octubre.

Le recordó al gobierno que pese a que su plan “ha caído en el vacío ante la ausencia de participación nacional, la carencia de espíritu de negociación y verdaderas alternativas de solución en el orden político, económico y social”, estaba dispuesta a iniciar conversaciones con los ministros de Gobierno, de Defensa y de Minas, invitando como testigo de excepción a la Comisión de Convivencia encabezada por el obispo Darío Castrillón, presidente del CELAM.

Barco no sólo rechazó esta salida sino que intentó maniobrar expresando que no estaba dispuesto a negociar con la Coordinadora sino con cada organización, intentando con ello profundizar las diferencias existentes al interior de la instancia unitaria. No lo logró pese a que las FARC, el M-19, el Comando Indígena Quintín Lame y el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) mantienen frente a la coyuntura una postura diferente, mas no antagónica, con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Ejército Popular de Liberación (EPL), que sin descartar la solución negociada consideran que no es el momento de treguas.

El 16 de noviembre, a cinco días de la espeluznante matanza “paramilitar” de Segovia —43 muertos y 30 heridos—, el senador Álvaro Leyva presenta una propuesta de itinerario para iniciar conversaciones con la insurgencia y posibilitar el que, agotados los pasos previstos, el

gobierno diga abiertamente a la opinión pública si hay paz o guerra.

Es claro que hay guerra y los hechos lo confirman diariamente. Se trata, entonces, de formalizarla y desechar el lenguaje ambiguo que coadyuva a incrementar los niveles de una violencia que colinda con los terrenos de la locura.

Se prevé un cese de hostilidades y el nombramiento de cinco notables negociadores que deben determinar si es viable el inicio de negociaciones entre la insurgencia y el gobierno.

El plan es aprobado tanto por las FARC como por el M-19, que hacen llegar cartas a los expresidentes Turbay Ayala, jefe del liberalismo, y Misael Pastrana Borrero, jefe del conservatismo, ordenando el cese al fuego unilateral a sus fuerzas. El gobierno manifiesta su interés por el plan conservador, pero nunca dicta las medidas requeridas para ponerlo en marcha.

Paramilitares, militares y gobierno

En medio de este tira y afloja, la contrainsurgencia, amparada en la fachada de “paramilitares” que escapan al control del gobierno y que no pueden ser desmontados, en palabras del general (R) Álvaro Valencia Tovar, “porque no tienen la presencia de los grupos guerrilleros, no atacan al gobierno y no hay posibilidad de combate”, continúa incrementando las matanzas e intenta sembrar el terror entre los opositores y jueces de la República.

El diario *El Mundo*, en su edición del 6 de diciembre, reseñando la “Matanza de Valdivia” —paradójicamente el mismo día en que informa el cese al fuego decretado por las FARC a todos sus frentes— dice que hasta esa fecha han ocurrido 33 matanzas colectivas en el país en lo que va de 1988. Lo que no dice es que en la mayoría de ellas participaron oficiales y soldados y que las matanzas han sido efectuadas en departamentos militarizados, sea porque la autoridad civil ha sido desplazada por jefaturas militares (zona bananera de Urabá) o porque existe una gubernatura militar (Caquetá) o campañas permanentes en zonas de contrainsurgencia.

Extrañamente, las bandas nunca se topan con el ejército y cuando la Procuraduría descubre a los autores —policiales o militares que en Colombia es lo mismo— le es imposible detenerlos porque están de vacaciones o se escapan de los cuarteles.

Aunque resulta muy clarificador el hecho de que el comentado plan de paz de Barco en ningún momento se comprometió con el desmonte de los “paramilitares” —uno de los aspectos más criticados del plan—, el gobierno y

los medios de comunicación al servicio de la estrategia han preferido excusarse nacional e internacionalmente mostrándose como un gobierno débil ante el embate de la derecha, la izquierda, el narcotráfico y la delincuencia común.

No importa que se perciba desinstitucionalización e incapacidad para garantizar la vida de los ciudadanos. El discurso ideológico reaganiano, cargado de un profundo cinismo, es contundente y para ellos útil. Interrogado, el ministro de Justicia, Guillermo Plazas Alcid, simplifica la gravedad diciendo públicamente que "si el Estado perdió el control de la fuerza, la subversión perdió el control absoluto del terror", o lo que es más claro: si la izquierda utiliza el terror, la derecha tiene el mismo derecho de acción en la zonas de influencia de la izquierda.

Para el sistema, los paramilitares son cruzados del anticomunismo o contraguerrilla civil, y ante los dos demonios sólo el gobierno y las fuerzas armadas pueden salvar la democracia.

Asesores presidenciales han dicho que estos vengadores han surgido "hartos de lo que interpretan como impotencia del ejecutivo y las fuerzas armadas y apoyados en la certidumbre del peligro comunista (...) Han decidido su plantar al Estado en la lucha antisubversiva. Algo así como otro Estado dentro del Estado".

Uno de estos grupos, autor de la matanza de Segovia, clarifica en uno de sus comunicados la posición. A propósito de la renuncia forzada del hoy exministro de Defensa y actual embajador de Colombia en Chile, Rafael Samudio, doce días después de que Barco se la solicitara debido a su inoportuno llamado a la ofensiva total, y a sólo dos días de la referida matanza, el grupo reivindicó este hecho afirmando: "asumimos como bandera propia las directrices emitidas por quien seguirá siendo nuestro general Rafael Samudio, en el sentido de reactivar con esmero y ahínco las operaciones ofensivas a todo lo largo y ancho del territorio colombiano contra nuestro objetivo común, la subversión generalizada".

Es claro que en una sociedad como la colombiana, sometida a los rigores de la doctrina de Seguridad Nacional desde 1974 e inserta en una vieja guerra de intensidad variada, todas estas justificaciones y subterfugios legalistas—"política de la guerra" llaman los especialistas—resultan útiles pero para prolongar el conflicto, que se pretende negociar democráticamente. El gobierno ha jugado demasiado con ello y se espera lo siga haciendo.

Se puede jugar permanentemente con la mentira pero se corre el riesgo de ser descubierto, incrementándose el desprestigio del Estado. La misión encabezada por el premio Nobel

de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, rindió su informe y en él puede leerse: "Colombia continúa gozando de un régimen democrático, al menos en el plano institucional y formal, pero en la práctica padece de graves imperfecciones". De estas imperfecciones destaca "la campaña clandestina de intimidaciones y asesinatos dirigida contra la oposición de izquierda" y el hecho que "a lo largo de toda la historia de Colombia, las fuerzas armadas han desempeñado un papel mayor en el mantenimiento del orden, disfrutando de un grado de autonomía que rara vez se ha observado en una democracia".

Luego de afirmar que lo que se requieren son reformas, Pérez Esquivel expresa su convicción de que las violaciones a los derechos humanos se coordinan al nivel más alto de las fuerzas armadas y provienen de una decisión estratégica de llevar una guerra clandestina de exterminio, no solamente contra los simpatizantes de la guerrilla sino también contra cualquiera que sea hostil a este esfuerzo de exterminio. Al igual que para la comisión de Amnistía Internacional, el informe no hace distinción entre paramilitares y militares y sí critica abiertamente la impunidad como constante de los crímenes políticos.

Reforma constitucional y rencauce del bipartidismo

Los mecanismos de legitimación del Estado presentan un grado de esquizofrenia digno de la situación hasta aquí descrita. Mientras Álvaro Tirado Mejía, consejero nacional e internacional para los derechos humanos, justifica en todos los foros la buena voluntad de un régimen que pretende reformar la vieja Constitución de 1886, este proceso se ha intentado desconociendo el afán de participación popular. El proyecto presentado al Congreso, que implica la modificación de ciento ochenta de los doscientos doce artículos que conforman la Constitución, pasó por alto al propio Congreso. El acuerdo entre los expresidentes Turbay y Pastana con el presidente Barco dio lugar a la aprobación, en la cúpula, del 70 por ciento del articulado a espaldas de los legisladores.

Mientras la nueva Constitución ofrecida habla de la necesidad de institucionalizar una democracia participativa, el acuerdo llevó a que el 14 de diciembre se diera aprobación final en la Cámara de Diputados a 55 artículos en el tiempo récord de un minuto. El método empleado levantó la protesta de los representantes liberales, conservadores, comunistas y de la UP, que consideraron el montaje como "una farsa y una burla para el pueblo".

Las fuerzas sociales y los analistas se preguntan por qué, si el gobierno manifiesta una voluntad negociadora, quiere modificar la estructura constitucional de la sociedad sin el concurso de ella.

Hay una explicación clara. Frente a la sociedad en movimiento la "seguridad nacional" pretende a toda costa desmovilizarla sin importarle que la protesta surja aun del seno de su propio bando. "Es la justificación —como expresa Edelberto Torres-Rivas— de la tradición de violencia estatal proponiendo nuevos elementos técnicos e ideológicos para que la fuerza aparezca disimulada y justificada". Es la manifestación del autoritarismo que parece no estar dispuesto a modificar ese comportamiento pese a la amenaza de la guerra generalizada.

Por qué con el M-19

La necesidad de hacer política llevó a Barco a sorprender a la opinión pública el 20 de diciembre pasado, cuando anunció su disposición de negociar con el M-19 por ser "el único grupo alzado en armas que ha dado muestras de reconciliación".

La realidad es que la política de distensión impulsada por esta organización y las FARC permitió, en contra de la voluntad del gobierno, el desarrollo de acuerdos regionales en departamentos como el Cauca y el Tolima, históricamente azotados por la violencia oficial.

También es cierto que ambas organizaciones han debido soportar la nueva modalidad de guerra impuesta por los estrategas norteamericanos: los cercos a la inversa. Aprovechando el nuevo armamento adquirido, a los bombardeos sobre los campamentos guerrilleros les siguen los helicópteros artillados y el desembarco de tropas de élite helitransportadas, práctica utilizada constantemente en El Salvador.

La insurgencia ha denunciado cuatro de estas operaciones en los meses de noviembre y diciembre de 1988. El gobierno, al plantear como interlocutor al M-19, pretendió dividir nuevamente a la Coordinadora Simón Bolívar, táctica derrotada por la insurgencia. Carlos Pizarro, comandante de dicha organización, fue enfático en afirmar su rechazo a tan ingenua y maquiavélica fórmula.

Las palabras de Pizarro marcan la pauta de los alcances de las conversaciones y los tiempos por venir:

La nación se debate entre la guerra y la paz, si podemos avanzar hacia episodios de paz, los aprovecharemos para lograr una distensión, pero si vamos hacia la polarización entonces tenemos que tener las condiciones para poder acompañar al pueblo en su lucha por la liberación, por la democracia, por la soberanía. Buscamos en este periodo afinar una política de amplio espectro antioligárquico que nos facilite llevar la guerra no solamente al campo de batalla sino también a las casas mismas de la oligarquía de este país, queremos colocar al país en un periodo de definiciones políticas. La lucha, en este momento, es por la base social.